



EFE-

Visita del Alto Comisionado
a Venezuela

¿La vía más corta para llegar a la CPI?

Rafael Uzcátegui*

La historia contemporánea de Venezuela registra un suceso inédito: la visita oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Materializada el pasado mes de junio, es un hecho que, por sí mismo, refleja las discrepancias de una sociedad que clama justicia

En una breve pero intensa visita Michelle Bachelet, en su rol como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, estuvo en Venezuela del 19 al 21 de junio de 2019. Su presencia, por sí sola, significaba una victoria para quienes clamaban la presencia en el país de observadores independientes y calificados para constatar la situación de los derechos humanos. El último funcionario de esta envergadura aterrizó en Maiquetía en el año 2002, cuando el por entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, visitó Caracas luego de los sucesos de abril de 2002.

Sin embargo, lo que era una conquista de la presión de diferentes sectores democráticos tuvo lecturas disímiles y negativas, no solo por funcionarios con responsabilidad —por acción y omisión— en la violación de derechos humanos, lo que era de esperarse. También por quienes valoraban la presencia como una supuesta legitimación del polémico segundo período presidencial de Nicolás Maduro. ¿Qué podemos esperar de la actuación de los organismos internacionales, especialmente el que ahora dirige la señora Bachelet, para la mejora de las condiciones concretas de la vida de los venezolanos?

¿INVITADA DE MADURO?

El 27 de septiembre de 2018, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se aprobó una resolución sobre Venezuela con 23 votos a favor, en la que se exigía al Gobierno que abriera sus puertas a la asistencia humanitaria, expresando a su vez preocupación por lo que se calificó como “graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”. En el texto se solicitaba la colaboración con la Oficina de Derechos Humanos y el resto de los mecanismos del Consejo. Finalmente, se estableció como mandato a la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU la elaboración de un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos en el país, el cual sería presentado ante el Consejo, a mediados de 2019, previo a una actualización de forma oral en la sesión correspondiente a marzo de ese mismo año.

Tras esta resolución la alta comisionada para la ONU de los DD.HH., Michelle Bachelet, pidió a las autoridades venezolanas que dejaran entrar al país a los investigadores de su equipo técnico,

a fin de poder recabar la información necesaria. En una entrevista con *Noticias ONU*, Bachelet explicó que cuando se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, le hizo la solicitud de “acceso al país” y le explicó que su oficina, con o sin resolución, tenía la obligación de monitorear y hacer un reporte sobre la situación de los derechos humanos. Fue luego de esta petición que Nicolás Maduro permitiría su visita al país.

Bachelet llegó a Venezuela el miércoles 19 de junio para una visita de tres días al país. El jueves 20, en horas de la tarde, se reunió tanto con organizaciones de derechos humanos como con diferentes grupos de víctimas. En el espacio de una hora, veintiséis voceros tomaron la palabra para hacerle peticiones a la alta comisionada. Luego escuchó, con signos claros de empatía e interés, los testimonios de familiares de personas asesinadas por los cuerpos de seguridad y de presos políticos. “Además de medidas económicas y sociales, deben tomarse decisiones políticas para mejorar la situación”, reconocía la funcionaria. Seguidamente afirmaba, en el encuentro con los activistas, que su presencia tenía como objetivo lograr resultados en la mejora de algunas situaciones concretas. “Tengo algunas buenas noticias, no todas las que quisiera”, expresó cuando detalló el acuerdo de trabajo acordado verbalmente con las autoridades.

Además de la presencia de dos oficiales del Alto Comisionado de manera permanente en el país, con el objetivo de evaluar la ampliación del equipo técnico en seis meses y, eventualmente, la apertura de una oficina formal del ente en Caracas, apuntó el acceso a cárceles y presos políticos sin restricción, la visita de relatores independientes de Naciones Unidas, la realización de una evaluación del sistema de administración de justicia y la asesoría en la implementación de políticas públicas con impacto en derechos humanos.

¿MADURO HONRARÁ LOS COMPROMISOS?

Para valorar si hay la voluntad política suficiente para cumplir con estos acuerdos, tenemos que entender cuál es la lógica costo-beneficio para un gobierno de reiterada vocación no democrática, en permitir la visita del ente internacional más prestigioso en materia de derechos humanos. Según el razonamiento en que la afinidad ideológica puede colocarse por encima de los propios valores, Maduro continúa observando a Bachelet como lo que fue, militante del Partido Socialista de Chile y no como lo que es en la actualidad, rectora de una institución cuya fidelidad está en los valores universales y de no discriminación propios de los derechos humanos. Además de la fotografía Bachelet-Maduro,



REUTERS

el segundo objetivo sería fortalecer la narrativa oficial –que adjudica a las sanciones internacionales el origen de la crisis económica y social de los venezolanos– con cualquier opinión citable sobre el tema emitida por el Alto Comisionado, cuyo momento estelar será la presentación del tercer informe especial sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos que ocurrió a comienzos del mes de julio.

Acá debemos aclarar que una opinión generalizada dentro del movimiento mundial de derechos humanos es rechazar cualquier medida de presión que impacte negativamente en los derechos humanos de la población. Por lo tanto, es previsible que, de manera pública o privada, Michelle Bachelet solicite el retiro de este tipo de sanciones contra Venezuela. Aunque esto signifique el 5 % del contenido del tercer informe, Maduro está dispuesto a pagar el costo del 95 % restante, que ratificará la grave situación de la dignidad humana entre nosotros, la sistematicidad del abuso de poder y la indefensión del ciudadano frente a ellos. La estrategia del Alto Comisionado, entendiendo la lógica oficial, era lograr con las autoridades que controlan territorio un acuerdo de trabajo previo a la divulgación del informe, un compromiso verbal al momento de redactar este artículo sin formalización por escrito.

El asesinato por tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta dinamitaba, desde las primeras horas, las capacidades de incidencia de los oficiales del Alto Comisionado sobre la realidad venezolana. La constatación de la escasa voluntad de Miraflores en mejorar la situación de los derechos humanos y traicionar la palabra empeñada, pudiera transformar el valor simbólico de Bachelet, que Maduro creía poder manipular a su favor, en un nuevo elemento capaz de erosionar su endeble legitimidad internacional. Por otra parte, la presencia de dos oficiales de su

oficina en el país permite que un abanico amplio de personas pueda ofrecer su testimonio sin intermediarios. En un contexto de ausencia de instituciones y orfandad de mecanismos internos de protección, esta posibilidad, por sí misma, es un mecanismo de reparación para víctimas y sus familiares. Sin embargo, este efecto terapéutico es limitado si los oficiales no tienen la capacidad de cumplir con el mandato que les ha sido encomendado, que incluye la visita a centros de detención y entrevistas confidenciales con presos políticos.

HACIA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

La presencia de oficiales del Alto Comisionado en el país, como fue acordado durante la visita de Bachelet a Caracas, no es el único mecanismo que esta institución puede implementar para abordar la situación venezolana. De manera complementaria, o como consecuencia de la ineficacia de los esfuerzos por instalar una oficina permanente en el país, una estrategia que han venido impulsando las ONG de derechos humanos es la conformación de una Comisión de Investigación sobre Venezuela por mandato de Naciones Unidas. El Alto Comisionado tiene la posibilidad de solicitar al secretario general de la ONU la selección y nombramiento de sus miembros con calificaciones suficientes y reconocidas en la materia, en una cifra impar de tres o cinco para facilitar la toma de decisiones. Los integrantes de una Comisión de Investigación deben ser independientes e imparciales, con experiencia internacional considerable en derechos humanos; de integridad personal reconocida y reputación moral intachable; con conocimiento del país, la situación y la región, entre otros requisitos.

No existe un modelo único para la conformación de las Comisiones de Investigación, que pueden abordar casos concretos o situaciones generales en derechos humanos. Se calcula que desde 1992 el Alto Comisionado ha constituido unas cincuenta comisiones y misiones en situaciones complejas y apremiantes: caso Georgia (1993), Burundi (1995), Timor Oriental (1999), Darfur (2004), Timor-Leste (2006) y Costa de Marfil (2011). No obstante, sus cometidos se han agrupado en cuatro grandes objetivos: 1) la determinación de los hechos; 2) la evaluación de esos hechos a la luz de la normativa aplicable; 3) la obtención de conclusiones y, donde proceda, sobre los presuntos autores y 4) la formulación de recomendaciones.

En su manual sobre las Comisiones de Investigación, el Alto Comisionado afirma:

La colaboración con un Estado puede resultar difícil cuando el gobierno en cuestión no consiente o no está de acuerdo con la creación de

una comisión/misión. Básicamente, el consentimiento permitirá que la comisión/misión tenga acceso a las personas, los lugares y la documentación necesarios para llevar a cabo la investigación.

Sin embargo, aclaran que la falta de colaboración gubernamental no impide la realización de las labores de investigación y determinación de los hechos, ni pueden evitar que se alcancen las conclusiones pertinentes. Tanto que, recordando lo realizado sobre el Conflicto de Gaza (2009), utilizaron el recurso de viajar a países aledaños para entrevistar a personas que pudieran tener información de primera mano sobre los sucesos objeto de la investigación, invitar a testigos y víctimas a prestar testimonio fuera de sus países y apoyarse más en declaraciones oficiales y materiales de dominio público, así como en contactos informales con personas cuyas declaraciones reflejaban las posiciones oficiales.

Los resultados de una Comisión de Investigación sobre Venezuela, ordenada por el Alto Comisionado, pudiera significar un elemento decisivo en la apertura formal de un caso contra el país por parte de la Corte Penal Internacional. Además, sus revelaciones harían retroceder, aún más, a quienes continúan defendiendo la permanencia de un gobierno autoritario y no democrático, aumentando la presión diplomática en aras de una resolución pacífica, política y concertada de la crisis.

*Sociólogo. Coordinador general de Provea.